

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/77302 a 184/77305

02/07/2015

200288 a 200291

AUTOR/A: HURTADO ZURERA, Antonio (GS)

RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que en el momento en el que el plan de reestructuración del Banco Mare Nostrum (BMN) fue aprobado y en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adquirió una participación mayoritaria en el capital de BMN (12 de marzo de 2013) el proceso de resolución de esa entidad se regía por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

De acuerdo con el artículo 22.1 de dicha ley, la apertura de un proceso de resolución no supone necesariamente la sustitución del órgano de administración, siendo una facultad que no una obligación del Banco de España. Dicho precepto establece lo siguiente:

“1. Tras la apertura del proceso de resolución conforme a lo previsto en el artículo anterior, el Banco de España acordará la sustitución del órgano de administración de la entidad al amparo de lo establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con las especialidades previstas en esta Ley, y designará como administrador de la entidad al FROB, que, a su vez, nombrará a la persona o personas físicas o jurídicas que, en su nombre, ejercerán las funciones y facultades propias de esa condición.

El Banco de España podrá no sustituir al órgano de administración de la entidad en aquellos supuestos extraordinarios en los que, a la vista de la composición del accionariado o del órgano de administración de la entidad en el momento de la apertura del proceso de resolución, no resulte necesario proceder a dicha sustitución para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de resolución y, en particular, cuando el FROB esté en disposición de controlar el órgano de administración de la entidad en virtud de los derechos políticos de que disponga.”

Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de dicha ley “La suscripción o adquisición de estos instrumentos determinará, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo, salvo la notificación correspondiente al Registro Mercantil de los votos que le corresponden, la atribución al FROB de los derechos políticos correspondientes y su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora. El FROB nombrará a la persona o personas físicas que ostenten su representación a tal efecto y dispondrá en el órgano de administración de tantos votos como los que resulten de aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad, redondeado al entero más cercano.”



Por lo tanto, con estricto cumplimiento de la legalidad vigente, antes de acordar la forma de incorporación del FROB al órgano de administración de cada entidad, era necesario que se hiciera un juicio de valoración de la idoneidad de la medida, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada una de las entidades, y, en cualquier caso, el aseguramiento del efectivo cumplimiento de los respectivos planes de resolución, a cuya consecución se enmarcaba la medida. Es más, la adopción de una decisión de cambio significativo en el órgano de gestión de una entidad en resolución debía adoptarse siempre evaluando no solamente la solidez de las causas que motivasen la misma sino también la oportunidad del momento en que se fuera acordar, de forma que se tratara de garantizar en cualquier caso un adecuado funcionamiento del órgano de gestión, minimizando el perjuicio que pudiera ocasionar dicho cambio para la entidad, lo que, en definitiva, aseguraría de forma más eficaz el cumplimiento del plan de resolución.

En el caso concreto de BMN, la incorporación del FROB a su Consejo de Administración tenía como fin primordial el garantizar la adecuada ejecución de su plan de resolución, para cuya consecución se consideró especialmente recomendable que la participación del FROB no tuviera carácter ejecutivo dado que esta forma de organización era la que permitía alcanzar este objetivo de la manera más eficaz y eficiente. Y ello, en atención a la situación económica de BMN, el adecuado cumplimiento que desde la entidad se estaba dando a los hitos previstos en su plan de resolución, así como al perfil de las personas que estaban asumiendo las funciones ejecutivas.

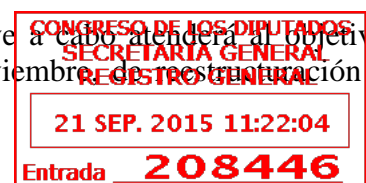
A mayor abundamiento debe señalarse que la entrada del FROB en el capital de BMN no supuso la adquisición del 100% del capital social, por lo que lo más conveniente de acuerdo con la normativa mercantil, así como con las Recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo, era mantener una composición del Consejo de administración que fuera equilibrada y adecuada a tales previsiones.

Por último, debe tenerse en cuenta que, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 31.3 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, la adquisición de instrumentos de capital en BMN, supuso la atribución al FROB de los derechos políticos correspondientes y su incorporación al órgano de administración de la entidad disponiendo en este último de tantos votos como los que resultaran de aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad, lo que de facto implica que ejerce desde el ámbito interno de la propia entidad un control del equipo ejecutivo, sin necesidad de que implique una injerencia directa respecto de las entidades, pero reservándose en cualquier caso la facultad de ratificar o vetar aquellas decisiones que pudieran adoptarse e implicar un perjuicio para la entidad, en especial separarse de las líneas marcadas y de las obligaciones impuestas en su plan de resolución.

La exigencia de responsabilidades a los anteriores gestores de BMN, así como la detección de cualquier conducta irregular, ha sido desde el inicio de la reestructuración bancaria uno de los principales focos de atención del FROB.

El FROB publicó en su página web el 14 de febrero de 2014, que en el año 2013 había acordado un protocolo de actuación, que supuso la realización de 90 análisis forenses, para lo que se ha contado con servicios externos especializados. Las investigaciones realizadas se han centrado fundamentalmente en dos tipos de actuaciones, las relativas a operaciones relacionadas con el tráfico inmobiliario y las relativas a prácticas retributivas. A este respecto, en la medida en que se trataba de una entidad participada por el FROB, el referido protocolo de actuación se ha aplicado también a BMN.

Por último, cabe recordar que cualquier actuación que se lleve a cabo atenderá al objetivo previsto en el artículo 3, apartado c) de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y





resolución de entidades de crédito, que al regular los “Objetivos de la reestructuración y resolución” establece el de asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos que, con carácter extraordinario, pueda ser necesario conceder, por lo que cualquier decisión de esta naturaleza deberá ajustarse a dicho objetivo.

Madrid, 17 de septiembre de 2015